

PRONUNCIAMIENTO N° 121-2025/OSCE-DGR

Entidad : Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERÚ

Referencia : Concurso Público N° 7-2024-ELECTROPERU-1, convocado para los “Servicios de patrocinio legal integral para las etapas de Junta de Resolución de Disputas y arbitrajes del contrato N° 2240030”

1. ANTECEDENTES

Mediante el formulario de solicitud de emisión de pronunciamiento recibido el 28¹ de enero de 2025, y subsanado el 5² de febrero de 2025, el presidente del Comité de Selección a cargo del procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones presentadas por el participante **“REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.”**, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la “Ley”, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”.

Ahora bien, cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la información complementaria remitida por la Entidad, con fecha 20³ de febrero de 2025, mediante la Mesa de Partes de este Organismo Técnico Especializado, lo cual tiene carácter de declaración jurada.

Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio⁴ y el tema materia de cuestionamiento del mencionado participante, conforme al siguiente detalle:

- **Cuestionamiento N° 1** : Respecto a las absoluciones de las consultas y/u observaciones N° 1, N° 2 y N° 5 referidas a la **“Formación académica del personal clave”**.
- **Cuestionamiento N° 2** : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 15 referida a la **“Participación del personal clave”**.

¹ Mediante Expediente N° 2025-0013544

² Mediante Expediente N° 2025-0017904.

³ Mediante Expediente N° 2025-0025124.

⁴ Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF.

- **Cuestionamiento N° 3** : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 18 referida al “**Tipo de arbitraje**”.

2. CUESTIONAMIENTOS

De manera previa cabe señalar que el OSCE no ostenta la calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de determinados aspectos del requerimiento; sin embargo, puede requerir a la Entidad informes que contengan la posición técnica al respecto⁵, considerando que el área usuaria es la Dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Cuestionamiento N° 1 Respecto a la “Formación académica del personal clave”

El participante “**REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.**” cuestionó las absoluciones de las consultas y/u observaciones N° 1, N° 2 y N° 5, indicando lo siguiente:

- “La modificación del requisito de formación académica del abogado líder vulnera el principio de eficiencia y eficacia, ya que contar únicamente con el requisito de magíster o máster en derecho **no se orienta al cumplimiento de los fines, metas y objetivos a contratar, esto es, servicios legales especializados en contratación pública**”.
- “Es fundamental que se requiera que el abogado líder cuente con una maestría o máster en derecho y/o gestión pública y/o contrataciones del estado y/o en arbitrajes y/o resolución, negociación, solución de conflictos, debido a que **la especialidad es fundamental para brindar el servicio a contratar con eficiencia**”.

Finalmente, señala que, en concordancia con el servicio de patrocinio legal solicitado, resultaría relevante que el abogado líder cuente con un “Título de magister o máster en Derecho de las Contrataciones con el Estado y/o Gestión Pública y/o en Arbitrajes y/o Resolución, Negociación, Solución de Conflictos”, y, por tanto, corresponde dejar sin efecto las absoluciones de las consultas v/u observaciones N° 1, N° 2 y N° 5.

Pronunciamento

Sobre el particular, debemos iniciar señalando que en el numeral 12 “Perfil y experiencia del Postor y del personal” y en el numeral 3.2 “Requisitos de

⁵ Ver el Comunicado N° 011-2013-OSCE/PRE.

calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

<p>“12. Perfil y experiencia del Postor y del personal (...) 12.1. Personal Clave – Abogado Líder (...) b) Formación Profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Título Profesional de Abogado registrado en SUNEDU, colegiado y habilitado para ejercer la profesión.</i> • <i>Título de magister o máster en Derecho registrado en SUNEDU, <u>en Contrataciones Públicas y/o Gestión de Contrataciones Públicas y/o en Arbitrajes y/o Resolución, Negociación, Solución de Conflictos.</u></i> <p>(...)</p> <p>3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</p>	
A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><u>A.1.1. ABOGADO LÍDER:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Título profesional de abogado registrado en SUNEDU.</i> - <i>Título de magister o máster en Derecho registrado en SUNEDU, <u>en Contrataciones Públicas y/o Gestión de Contrataciones Públicas y/o en Arbitrajes y/o Resolución, Negociación, Solución de Conflictos.</u></i> <p>(...)”</p>

(Lo subrayado y resaltado es nuestro).

Es así que mediante las consultas y/u observaciones N° 1, N° 2 y N° 5, se solicitó lo siguiente:

Consulta y/u observación	Absolución
N° 1:	

<p><i>“Solicitamos retirar como requerimiento de formación académica el "título de magister o máster en Derecho" por dos motivos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Los programas académicos peruanos de Maestría en Contrataciones Públicas con estas denominaciones son de reciente creación, lo que reduce la oferta y la pluralidad de postores.</i> <i>- La experiencia requerida para el Abogado Líder supera largamente la necesidad de requerir un grado de magíster, debido a que se solicita más de 15 años de experiencia laboral y además se está solicitando capacitación específica en arbitraje y resolución de disputas. A fin de garantizar la pluralidad de postores, solicitamos requerir título de abogado y estudios concluidos de maestría”.</i> 	
<p>Nº 2</p> <p><i>“Se solicita maestrías con denominaciones específicas Contratación Pública), excluyendo otras con formación similar formación (Gestión Pública y Regulación. Nuevamente, se reduce la oferta de postores innecesariamente, pese a que más adelante se pide experiencia y capacitación específica en arbitraje y contratación estatal”.</i></p>	<p><i>“Se acoge parcialmente el pedido (...) En las Bases, para los requisitos del Abogado líder, se modifica el requisito consignado en el segundo guión del numeral</i></p> <p><i>A.1.1. Formación Académica y en el literal b) del numeral 12.1 "Personal clave - Abogado Líder, el cual quedará redactado como: Título de magister o máster en Derecho registrado en SUNEDU”.</i></p>
<p>Nº 5</p> <p><i>“En los requisitos de calificación, en cuanto a la formación académica del personal clave, se está solicitando que el abogado líder cuente con título de magister o máster en derecho registrado en SUNEDU, en Contrataciones Públicas y/o Gestión de Contrataciones Públicas y/o en Arbitrajes y/o Resolución, Negociación, Solución de Conflictos. Al respecto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el principio de libertad de concurrencia, mediante el cual se promueve el libre acceso, igualdad</i></p>	

<p>de trato y participación de proveedores, evitando prácticas que limiten y/o afecten la libre concurrencia de proveedores y disponer las mismas oportunidades para formular sus ofertas y establecer condiciones de competencias efectiva, se OBSERVA que el abogado líder cuente con título de magister o máster en derecho registrado en SUNEDU o especialización en Contrataciones Públicas y/o Gestión de Contrataciones Públicas y/o en Arbitrajes y/o Resolución, Negociación, Solución de Conflictos”.</p>	
---	--

Siendo así, en el numeral 12 “Perfil y experiencia del Postor y del personal” y en el numeral 3.2 “Requisitos de calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente:

<p>“12. Perfil y experiencia del Postor y del personal (...) 12.1. Personal Clave – Abogado Líder (...) b) <u>Formación Profesional</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Título Profesional de Abogado registrado en SUNEDU, colegiado y habilitado para ejercer la profesión. • Título de magister o máster en Derecho registrado en SUNEDU, en Contrataciones Públicas y/o Gestión de Contrataciones Públicas y/o en Arbitrajes y/o Resolución, Negociación, Solución de Conflictos. <p>(...)</p> <p>3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</p>	
A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><u>A.1.1. ABOGADO LÍDER:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Título profesional de abogado registrado en SUNEDU.

	<p>- Título de magister o máster en Derecho registrado en SUNEDU, en Contrataciones Públicas y/o Gestión de Contrataciones Públicas y/o en Arbitrajes y/o Resolución, Negociación, Solución de Conflictos.</p> <p>(...)"</p>
--	---

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde señalar la Entidad mediante el Informe N° 00002-2025-GL, indicó lo siguiente:

*“El cambio efectuado en las bases se alinea con estos principios, al **ampliar la concurrencia sin comprometer la idoneidad del servicio, garantizando que se cuente con profesionales altamente capacitados.***
(...)
La normativa de contrataciones del Estado dispone que los requisitos exigidos en los procedimientos de selección deben estar directamente relacionados con la naturaleza de la contratación y ser proporcionales al objeto del contrato.

*En ese sentido, **la exigencia de una Maestría en Derecho registrada en SUNEDU es un requisito pertinente y suficiente, pues garantiza una formación académica avanzada en materia jurídica,** sin que sea indispensable una especialización exclusiva en contrataciones públicas o arbitraje.*

***La especialización específica se encuentra asegurada a través de la experiencia y capacitación exigidas en las Bases,** lo que garantiza la correcta ejecución del servicio sin restringir indebidamente la participación de postores.*

(...) consideramos que el contar con un grado de Máster o Magister en Derecho garantiza que el Abogado Líder tendrá una formación académica adicional y más completa que la que ostentan aquellos profesionales que solo tienen el grado académico correspondiente. Esa formación académica adicional garantiza una visión más integral en el campo del Derecho. Lo que en adición a la especialización que puede obtenerse a través de la capacitación o experiencia específica garantiza un servicio eficiente y eficaz” (Lo subrayado y resaltado es nuestro).

De esta manera, se desprende que la Entidad ratificó lo absuelto en las mencionadas consultas y/u observaciones, indicando que: **i)** El cambio efectuado en las bases amplía la concurrencia sin comprometer la idoneidad del servicio, garantizando que se cuente con profesionales altamente capacitados, **ii)** La exigencia de una maestría en Derecho registrada en SUNEDU resulta pertinente y suficiente, pues garantiza una formación académica avanzada en materia jurídica, y **iii)** La especialización específica se encuentra asegurada a través de la experiencia y capacitación exigidas en las Bases para el personal clave en cuestión.

Por lo tanto, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, dispuso modificar (ampliar) la formación académica del personal clave “abogado líder”, lo cual, según declara, no compromete la ejecución eficiente y eficaz del servicio; además, fomenta la mayor participación de potenciales postores.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente está orientada a dejar sin efecto las absoluciones de las consultas y/u observaciones N° 1, N° 2 y N° 5; y en la medida que la Entidad ha sustentado los motivos por los que corresponde conservar la modificación realizada; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **NO ACOGER** el presente cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar **el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico**, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que los lineamientos de las Bases Estándar aplicables a la presente contratación establecen que la formación académica del personal clave de los requisitos de calificación se debe acreditar con “grado” o “título profesional”. Es decir, en caso de requerir formación universitaria, deberá considerarse un grado académico conforme a la Ley Universitaria u otras normas similares o el título profesional universitario.

Visto lo anterior, cabe señalar que los grados académicos reconocidos por la Ley Universitaria son el bachiller, maestro y doctor. Por lo tanto, no debería requerir simultáneamente el “título profesional” de abogado y el “grado” académico de maestro en los requisitos de calificación. En ese sentido, se emitirá la siguiente disposición:

- Se **suprimirá** el título profesional de abogado de los requisitos de calificación, debiendo mantenerse dicha exigencia en el requerimiento, y por ende se acreditará con la presentación de la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia (Anexo N° 3).

Cabe precisar que, **se deberá dejar sin efecto y/o ajustar** toda disposición del pliego absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

Cuestionamiento N° 2

Respecto a la “Participación del personal clave”

El participante “**REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.**” cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 15, indicando lo siguiente:

- Respecto al primer extremo de la consulta y/u observación N° 15, se estaría vulnerando el artículo 163 del Reglamento de Contrataciones del Estado, toda vez que las “Otras Penalidades” distintas a la mora deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Así, indica que “establecer que los 3 profesionales (abogado líder, abogado especialista e ingeniero civil) deben participar en todas las audiencias no resulta razonable ni congruente ni proporcional, porque no se necesita la presencia de los 3 profesionales en todas las audiencias, sino solo cuando en una de ellas se requiere explicar o aclarar un tema en el que el profesional tenga expertis, de esta manera la presencia del ingeniero en una audiencia en el que solo trata de derecho resulta en vano, por ejemplo”.

- Respecto al segundo extremo de la consulta y/u observación N° 15, se estaría vulnerando el Principio de Transparencia, debido a que *“no proporciona información clara y coherente respecto al cálculo de la penalidad, no se ha precisado si la penalidad se aplicará sobre el 2% del valor adjudicado por cada profesional integrante del personal clave que no asista a una audiencia, o si dicha penalidad es sólo sobre el 2% del valor adjudicado cuando en una audiencia se genere una inasistencia, así sea de uno o dos profesionales”.*

Por lo cual, se solicitó lo siguiente: i) Precisar que la aplicación de penalidad será por la inasistencia del profesional en la audiencia, ii) Aclarar la forma el cálculo de la penalidad, o iii) Dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 15.

Pronunciamiento

Sobre el particular, debemos iniciar señalando que en el numeral 16.2 “Otras penalidades” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

<i>“16.2. Otras penalidades</i>			
<i>Otras Penalidades</i>			
<i>N°</i>	<i>Supuestos de aplicación de penalidad</i>	<i>Forma de cálculo</i>	<i>Procedimiento</i>
<i>1</i>	<i>(...)</i>	<i>(...)</i>	<i>(...)</i>
<i>2</i>	<i>Por inasistencia a cualquier Audiencia convocada por el Tribunal Arbitral o citación</i>	<i>2 % del valor adjudicado por cada profesional integrante del</i>	<i>La Subgerencia Legal elaborará un informe sobre la inasistencia del profesional a la audiencia</i>

	efectuado por la JRD.	personal clave.	o citación, pudiendo validar la no participación del alguno de los profesionales del personal clave”.
--	-----------------------	-----------------	---

(Lo subrayado y resaltado es nuestro).

Es así que, mediante la consulta y/u observación N° 15, se solicitó **aclearar** lo siguiente: i) Con esta penalidad se debe entender que, el personal clave (los 3 profesionales) deben asistir de manera conjunta y obligatoria a cualquier audiencia que se programe ante la JRD o en el Arbitraje, pues por la naturaleza de las audiencias, en algunas solo se requerirá la presencia de los abogados más no del ingeniero, (ii) Respecto a la forma de cálculo, a qué se refiere con "por cada profesional integrante del personal clave", máxime si en todas las audiencias no se requerirá la presencia del ingeniero.

Ante lo cual, el Comité de Selección precisó que “El personal clave, que incluye a los 3 profesionales, deberá participar en todas las audiencias”.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente referente al alcance de la penalidad N° 2, la Entidad mediante el Informe N° 00002-2025-GL, indicó lo siguiente:

*“Debemos señalar que la penalidad aplicable obedece a la **necesidad de resaltar la importancia de la participación del equipo identificado como Personal Clave en toda la ejecución del servicio, y a la inmediatez que deben tener todos sus integrantes** con las controversias que se susciten durante la ejecución de la obra y los posteriores arbitrajes. Cada uno de los integrantes del equipo tiene un rol especial, así se ha precisado en los Términos de Referencia de las Bases del Concurso (...)*

***El cumplimiento de cada uno de los roles asignados requiere la participación plena de cada uno de los profesionales en todas las audiencias y citaciones que se efectúen**, para con el cabal conocimiento de las circunstancias que se vayan suscitando hagan un mejor aporte en la ejecución de las funciones que le correspondan.*

El servicio de patrocinio legal integral para Juntas de Resolución de Disputas (JRD) y Arbitrajes requiere una participación activa y oportuna del equipo legal y técnico, asegurando que cada profesional cumpla con su función en la estrategia de defensa de ELECTROPERU. En tal sentido:

- ***La inasistencia de los profesionales clave podría generar perjuicio en la defensa de la Entidad, afectando la calidad del servicio contratado.***
- *La imposición de penalidades no busca ser una medida sancionadora excesiva, sino una garantía para que los*

profesionales comprometidos cumplan con su participación en audiencias y citaciones

Por lo tanto, la aplicación de la penalidad se encuentra debidamente justificada y alineada con la normativa de contrataciones, garantizando la calidad del servicio y la defensa de los intereses de la Entidad.

Por lo expuesto, se solicita a la Dirección de Gestión del Riesgo del OSCE que declare infundada la observación elevada por el postor en este extremo, ratificando la validez de la precisión realizada en las bases del Concurso Público” (Lo subrayado y resaltado es nuestro).

Aunado a ello, en referencia al cálculo de la penalidad N° 2, la Entidad mediante el Informe N° 00004-2025-GL, indicó lo siguiente:

*“Se precisa que **la penalidad del 2% se aplicará de forma individual por la inasistencia de cada uno de los profesionales propuestos como personal clave y en cada una de las audiencias que se programen.***

Esto se fundamenta en la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario, en el que tanto el soporte legal proporcionado por los abogados como el soporte técnico del ingeniero son esenciales para el adecuado desarrollo de cada audiencia y el seguimiento de la ejecución contractual de manera integrada. La ausencia de alguno de estos profesionales compromete la integridad del soporte técnico legal, lo que podría generar perjuicios significativos en la resolución de las controversias, lo que justifica el porcentaje para el cálculo de la penalidad, considerando la complejidad y tecnicismo de las controversias que se derivan de una obra de rehabilitación de estructuras aguas abajo de la presa tablachaca, considerada una infraestructura de alta complejidad” (Lo subrayado y resaltado es nuestro).

Cabe precisar que mediante la absolución de la consulta y/u observación N° 15, la Entidad precisó que todo el personal clave (3 profesionales) deberá participar de las audiencias; no obstante, no aclaró lo consultado respecto al cálculo de la penalidad.

Siendo que, mediante el Informe N° 00002-2025-GL, la Entidad ratificó la participación de todo el equipo identificado como personal clave en toda la ejecución del servicio, indicando que el cumplimiento de cada uno de los roles asignados requiere la participación plena de cada uno de los profesionales en todas las audiencias y citaciones que se efectúen, para con el cabal conocimiento de las circunstancias que se vayan suscitando hagan un mejor aporte en la ejecución de las funciones que le correspondan; por lo cual, la inasistencia de los profesionales clave podría generar perjuicio en la defensa de la Entidad, afectando la calidad del servicio contratado.

Asimismo, respecto al cálculo de la penalidad, precisó que la penalidad del 2% se aplicará de forma individual por la inasistencia de cada uno de los profesionales propuestos como personal clave y en cada una de las audiencias que se programen. Cabe precisar que, dicha disposición está contenida en las Bases de la convocatoria.

Por lo tanto, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, ratificó el supuesto de aplicación de la penalidad N° 2 y la forma de cálculo establecida.

En ese sentido, considerando todo lo expuesto, y en la medida que la Entidad ha sustentado los motivos por los que ratifica su requerimiento; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **NO ACOGER** el presente cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar **el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico**, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 3

Respecto al “Tipo de arbitraje”

El participante **“REYES & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.”** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 18, indicando que la absolución del Comité de Selección vulnera el Principio de Transparencia, debido a que no proporciona información clara y coherente respecto al tipo de arbitraje que se establecerá, debido a que en la proforma del contrato de las Bases Integradas se reitera en el pie de página la posibilidad de recurrir a un arbitraje “ad hoc” y, por otro lado que el arbitraje se realizará mediante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Por lo cual, se solicitó dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 18 y modificar el tipo de arbitraje a “ad hoc”.

Pronunciamiento

Debemos iniciar señalando que en el numeral 22.1 “Cláusula arbitral” del Capítulo III y en la “Cláusula décima octava” de la “Proforma de contrato” contenida en el Capítulo V de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

CAPÍTULO III

“22.1 Clausula Arbitral

- *Las partes acuerdan expresamente que cualquier conflicto o controversia que pudiera surgir entre ellas como consecuencia de la interpretación o ejecución de este contrato, incluidas las relacionadas con su nulidad e invalidez, será resuelta por un tribunal arbitral mediante arbitraje de derecho, bajo la organización y administración de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de acuerdo con su Reglamento.*
- *El arbitraje se realizará en la ciudad de Lima y el Laudo emitido es definitivo e inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa o arbitral, y tienen valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.*
- *Sin perjuicio del convenio arbitral contenido en esta cláusula, las partes se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima para efectos de la eventual aplicación del Decreto Legislativo N° 1071 “Ley de Arbitraje”.*

(...)

CAPÍTULO V

“CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado” (El subrayado y resaltado es nuestro).

Es así que, mediante la consulta y/u observación N° 18, se solicitó **modificar** la cláusula arbitral, precisando que el arbitraje sea de tipo “AD HOC”; ante lo cual, el Comité de Selección precisó que “*Considerando que la posibilidad de recurrir al arbitraje ad hoc es facultativo, se precisará la redacción de la cláusula arbitral contenida en la proforma del Contrato a fin de que en caso de recurrirse a arbitraje, este será bajo la organización y administración de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú*”. Por tal motivo, las Bases se integraron bajo los siguientes términos:

“CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

En caso de recurrirse a arbitraje, este será bajo la organización y administración de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú”.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, la Entidad mediante el Informe N° 00002-2025-GL, indicó lo siguiente:

“(…) el Reglamento de la LCE dispone que el arbitraje puede ser institucional o ad hoc, dependiendo de lo que establezca el contrato, siempre que se garantice la independencia e imparcialidad del tribunal arbitral.

*Al respecto debemos señalar que el pie de página que aparece en la proforma de contrato corresponde a las bases standard, por lo que siendo facultativa la inclusión del arbitraje Ad Hoc, **ELECTROPERU S.A. ha optado por no aceptarla, lo cual queda claramente establecido cuando se suscribe el contrato y ha sido confirmado al absolver las consultas y/u observaciones,** habiéndose señalado que el arbitraje será en él será bajo la organización y administración de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.*

2.10. Justificación de la Elección del Arbitraje Institucional

*ELECTROPERU ha establecido en las Bases y en el contrato que el arbitraje será bajo la organización y administración de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), **descartando la posibilidad de un arbitraje ad hoc.***

ELECTROPERU ha tomado una decisión válida y razonable al optar por

un arbitraje institucional, asegurando transparencia, imparcialidad y eficiencia en la resolución de controversias. Asimismo, la referencia al arbitraje ad hoc en el pie de página no afecta la validez de la cláusula, ya que lo que prevalece es el contenido explícito del contrato” (El subrayado y resaltado es nuestro).

Visto lo anterior, y en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que, mediante el Informe N° 00002-2025-GL, la Entidad ratificó lo absuelto en la consulta y/u observación N° 18, indicando que ha descartado la posibilidad de un arbitraje ad hoc, haciendo uso de la facultad descrita en la Ley y el Reglamento.

Asimismo, la Entidad ha ratificado que el arbitraje será bajo la organización y administración de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tal y como estuvo precisado en el requerimiento desde la convocatoria.

Bajo este contexto, es oportuno traer a colación la Opinión N° 80-2023/DTN, en la cual la Dirección Técnica Normativa ha señalado que la Entidad “puede” plantear términos y condiciones aplicables a la solución de controversias de la ejecución contractual, siempre que las disposiciones a ser incorporadas en la cláusula de solución de controversias -como por ejemplo- sean relativas al procedimiento de arbitraje, a su tipo, cantidad de árbitros y/o a las instituciones arbitrales, entre otras que no contravengan lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente está orientada a dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 18, y modificar el tipo de arbitraje; y en la medida que la Entidad ratificó el tipo de arbitraje previsto en las Bases desde la convocatoria, máxime si la Dirección Técnico Normativa ha previsto que dicha decisión comprende una potestad de la Entidad; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **NO ACOGER** el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo antes señalado, y con la finalidad de dotar de mayor claridad el contenido de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se **suprimirá** el pie de página referente a la posibilidad de recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00), contenido en la “Cláusula décima octava” de la “Proforma de contrato” del Capítulo V de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas.

Cabe precisar que, **se deberá dejar sin efecto y/o ajustar** toda disposición del pliego absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar **el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico**, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en

virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre los supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u observaciones, y no representa la convalidación de ningún extremo de las bases, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle:

3.1. Plazo de presentación del servicio

De la revisión de los numerales 1.8 “Plazo de prestación del servicio” del Capítulo I y 11.2 “Plazo de entrega” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

CAPÍTULO I
<p>“1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p><i>El plazo de ejecución de la prestación estará sujeto a la duración del proceso con la JRD y del arbitraje o arbitrajes posteriores hasta la emisión de un laudo que resuelva cada una de las controversias planteadas, o, en caso se presenten, la decisión que resuelva los pedidos contra el laudo (rectificación, interpretación, integración o exclusión), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación”.</i></p>
CAPÍTULO III
<p>“11.2 Plazo de entrega</p> <p><i>El plazo de ejecución de la prestación estará sujeto a la duración del proceso con la JRD y del arbitraje o arbitrajes posteriores hasta la emisión de un laudo que resuelva cada una de las controversias planteadas, o, en caso se presenten, la decisión que resuelva los pedidos contra el laudo (rectificación, interpretación, integración o exclusión)”.</i></p>

Al respecto, se advierte que, según las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección, se debe consignar un plazo de ejecución del servicio, según el siguiente detalle:

<p>“1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p>
--

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO] en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación” (Lo subrayado y resaltado es agregado).

En mérito a la observación realizada, mediante el Informe N°0004-2025-GL, la Entidad indicó lo siguiente:

“Considerando la naturaleza variable de la prestación del servicio en la resolución de disputas y arbitrajes, se establece un plazo estimado de ejecución de 24 meses, que se puede extender hasta la duración del proceso con la JRD y del arbitraje o arbitrajes posteriores hasta la emisión de un laudo que resuelva cada una de las controversias planteadas, o, en caso se presenten, la decisión que resuelva los pedidos contra el laudo (rectificación, interpretación, integración o exclusión).

Este rango permite ajustar el tiempo conforme a la complejidad y particularidades de cada controversia, sin fijar un plazo rígido que pudiera resultar inadecuado para casos específicos” (Lo subrayado y resaltado es agregado).

En ese sentido, se emitirá la siguiente disposición:

- Se **adecuarán** los numerales 1.8 “Plazo de prestación del servicio” del Capítulo I y 11.2 “Plazo de entrega” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, según el siguiente detalle:

CAPÍTULO I
<p>“1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p><i>El plazo estimado de ejecución de la prestación es de 24 meses, que se puede extender hasta la duración del proceso con la JRD y del arbitraje o arbitrajes posteriores hasta la emisión de un laudo que resuelva cada una de las controversias planteadas, o, en caso se presenten, la decisión que resuelva los pedidos contra el laudo (rectificación, interpretación, integración o exclusión) de ejecución de la prestación estará sujeto a la duración del proceso con la JRD y del arbitraje o arbitrajes posteriores hasta la emisión de un laudo que resuelva cada una de las controversias planteadas, o, en caso se presenten, la decisión que resuelva los pedidos contra el laudo (rectificación, interpretación, integración o exclusión), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación”.</i></p>
CAPÍTULO III
<p>“11.2 Plazo de entrega</p>

El plazo estimado de ejecución de la prestación es de 24 meses, que se puede extender hasta la duración del proceso con la JRD y del arbitraje o arbitrajes posteriores hasta la emisión de un laudo que resuelva cada una de las controversias planteadas, o, en caso se presenten, la decisión que resuelva los pedidos contra el laudo (rectificación, interpretación, integración o exclusión) ~~de ejecución de la prestación estará sujeto a la duración del proceso con la JRD y del arbitraje o arbitrajes posteriores hasta la emisión de un laudo que resuelva cada una de las controversias planteadas, o, en caso se presenten, la decisión que resuelva los pedidos contra el laudo (rectificación, interpretación, integración o exclusión)~~".

Cabe precisar que, **se deberá dejar sin efecto y/o ajustar** toda disposición del pliego absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

3.2. Requisitos para perfeccionar el contrato

De la revisión del de las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria se aprecia lo siguiente:

"2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.*
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.*
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso.*
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.*
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.*
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.*

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Al respecto, se advierte que en la presente convocatoria los literales e) y f) no corresponden a los documentos indicados en las bases estándar como no exigibles⁶, en caso la entidad los pueda visualizar en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE.

En ese sentido, se emitirá la siguiente disposición:

- Se **adecuarán** los literales del acápite “advertencia” del numeral 2.3. “Requisitos para perfeccionar el contrato” de las Bases Integradas Definitivas, de acuerdo al siguiente detalle:

“2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.*
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso.*
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.*
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.*
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.*

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

Cabe precisar que, **se deberá dejar sin efecto y/o ajustar** toda disposición del pliego absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

⁶ Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda y copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

3.3. Experiencia del personal clave

De la revisión de los numerales 12 “Perfil y experiencia del Postor y del personal” y 3.2 “Requisitos de calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

“12. Perfil y experiencia del Postor y del personal

12.1. Personal Clave – Abogado Líder

(...)

a) Experiencia

- ***Contar con experiencia no menor a 15 años de Colegiatura.***
- *Contar con experiencia no menor a 10 años en asesoría legal en arbitrajes o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras, o JRD y/o Arbitrajes. Se requiere acreditar el total de la experiencia requerida sin necesidad de que tal experiencia sea de forma ininterrumpida.*

(...)

12.2. Personal Clave – 01 Abogado Especialista en Arbitraje o JRD

(...)

a) Experiencia

- *Con experiencia no menor de 8 años en arbitraje o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras y/o JRD. Se requiere acreditar el total de la experiencia requerida sin necesidad de que tal experiencia sea de forma ininterrumpida.*

(...)

Personal Clave – 01 Ingeniero Civil

(...)

a) Experiencia

- *Con experiencia no menor de 3 años como adjudicador o participación en arbitraje y/o JRD o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras. Se requiere acreditar el total de la experiencia requerida sin necesidad de que tal experiencia sea de forma ininterrumpida.*

(...)

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

<i>A.2</i>	<i>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</i>
	<u><i>Requisitos:</i></u>

	<p>A.2.1. Experiencia general:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abogado Líder: Contar <u>con experiencia no menor a 15 años de Colegiatura</u> • Abogado Especialista en Arbitraje: <u>Contar con experiencia no menor de 10 años de Colegiatura.</u> • Ingeniero: <u>Contar con una experiencia no menor de 5 años de Colegiatura.</u> <p>A.2.2. Experiencia específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abogado Líder: Contar con experiencia no menor a 10 años en asesoría legal en arbitrajes, JRD o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras. • Abogado Especialista en Arbitraje o JRD: Contar con experiencia no menor de 8 años en arbitrajes, JRD o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras. Se requiere acreditar el total de la experiencia requerida sin necesidad de que tal experiencia sea de forma ininterrumpida. • Ingeniero: Contar con una experiencia no menor de 3 años como adjudicador o participación en arbitraje y/o JRD o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras. <p>(...)”</p> <p><i>(Lo subrayado y resaltado es agregado).</i></p>
--	---

Al respecto, se advierte que, según las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección, la experiencia corresponde a trabajos o prestaciones en la actividad requerida del personal clave, en un determinado puesto o cargo, según el siguiente detalle:

B.4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><u>[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA]</u> del personal clave requerido como <u>[CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACIÓN DE LA POSICIÓN QUE OCUPARÁ EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO]</u></p> <p>(...)”</p> <p><i>(Lo subrayado y resaltado es agregado).</i></p>

En mérito a la observación realizada, mediante el Informe N°0004-2025-GL, la Entidad indicó lo siguiente:

“En lo referente a la experiencia del personal clave, se acoge la solicitud de la DGR de suprimir la disposición que vincula la experiencia exclusivamente a los años de colegiatura del personal clave.

En ese sentido se suprimirá lo indicado en los numerales 12.1, 12.2 y 12.3, así como el literal A.2.1 que señalaba lo siguiente:

- Abogado Líder: Contar con experiencia no menor a 15 años de Colegiatura.*
- Abogado Especialista en Arbitraje: Contar con experiencia no menor de 10 años de Colegiatura.*
- Ingeniero: Contar con experiencia no menor a 5 años de Colegiatura”.*

En ese sentido, se emitirá la siguiente disposición:

- Se **adecuarán** los numerales 12 “Perfil y experiencia del Postor y del personal” y 3.2 “Requisitos de calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, según el siguiente detalle:

“12. Perfil y experiencia del Postor y del personal

12.1. Personal Clave – Abogado Líder

(...)

b) Experiencia

- ~~*Contar con experiencia no menor a 15 años de Colegiatura.*~~
- *Contar con experiencia no menor a 10 años en asesoría legal en arbitrajes o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras, o JRD y/o Arbitrajes. Se requiere acreditar el total de la experiencia requerida sin necesidad de que tal experiencia sea de forma ininterrumpida.*

(...)

12.2. Personal Clave – 01 Abogado Especialista en Arbitraje o JRD

(...)

a) Experiencia

- *Con experiencia no menor de 8 años en arbitraje o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras y/o JRD. Se requiere acreditar el total de la experiencia requerida sin necesidad de que tal experiencia sea de forma ininterrumpida.*

(...)

Personal Clave – 01 Ingeniero Civil

(...)

a) Experiencia

- Con experiencia no menor de 3 años como adjudicador o participación en arbitraje y/o JRD o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras. Se requiere acreditar el total de la experiencia requerida sin necesidad de que tal experiencia sea de forma ininterrumpida.

(...)

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>A.2.1. Experiencia general:</p> <ul style="list-style-type: none">● Abogado Líder: Contar con experiencia no menor a 15 años de Colegiatura● Abogado Especialista en Arbitraje: Contar con experiencia no menor de 10 años de Colegiatura.● Ingeniero: Contar con una experiencia no menor de 5 años de Colegiatura. <p>A.2.2. Experiencia específica:</p> <ul style="list-style-type: none">● Abogado Líder: Contar con experiencia no menor a 10 años en asesoría legal en arbitrajes, JRD o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras.● Abogado Especialista en Arbitraje o JRD: Contar con experiencia no menor de 8 años en arbitrajes, JRD o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras. Se requiere acreditar el total de la experiencia requerida sin necesidad de que tal experiencia sea de forma ininterrumpida.● Ingeniero: Contar con una experiencia no menor de 3 años como adjudicador o participación en arbitraje y/o JRD o consultorías relacionadas con contrataciones del Estado u obras(...).".

Cabe precisar que, **se deberá dejar sin efecto y/o ajustar** toda disposición del pliego absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

4. CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

- 4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.
- 4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección.

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre los aspectos relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente pronunciamiento.

- 4.3 Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases definitivas por el OSCE, corresponderá al comité de selección **modificar** en el cronograma del procedimiento, las fechas del registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento.
- 4.4 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Jesús María, 21 de febrero de 2025

Código: 6.1